



Santiago de Cali, 09 de marzo de 2025.

Señores

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

Cali - Valle del Cauca

Referencia: CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Radicación: N° 76001-33-33-009-2024-00278-00

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Alexander Arana Flor

Demandada: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, INPEC, USPEC, Municipio de Palmira y Otros

DIANA CAROLINA ARGOTE DELGADO, vecina de Cali, con cédula de ciudadanía No. 29.177.864 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional de Abogada N° 378.953 del C.S. de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la Nación - Rama Judicial en el proceso de la referencia, según poder otorgado por la Directora Seccional de Administración Judicial de Cali, conforme al artículo 103 numeral 7 de la Ley 270 de 1996, y estando dentro del término legal procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** en contra de la entidad que represento NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL.

A LAS PRETENSIONES.

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por cuanto como se demostrará en el presente escrito, no existe daño alguno causado por la entidad que represento al señor ALEXANDER ARANA FLOR, así mismo no se reúnen los requisitos para que dentro del régimen subjetivo se pueda atribuir responsabilidad por daño antijurídico a la entidad que represento.

Por otro lado, ninguna de las pretensiones en cuanto a su naturaleza y cuantificación, han sido debidamente acreditadas. Por el contrario, pretende la actora sin haber demostrado falencia alguna ni su inclusión en el nexo de causalidad, que actuaciones y omisiones de otras entidades, sean adjudicadas a la Nación - Rama Judicial; razón por la cual se solicita al despacho desestimar las pretensiones de la accionante y declarar probadas las excepciones de fondo y de mérito que se invocan en esta contestación y se probaran en el desarrollo del proceso.

A LOS HECHOS.

1.- No me constan. Me atengo a la prueba idónea y oportunamente allegada al expediente, no obstante, en el presente hecho no acredita ninguna antijuridicidad del daño que alega la parte actora y que, a su vez, provenga de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL DESAJ.

2.- al 6.- No me costa, sobre las instalaciones del CAI – COMANDO SUR DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA donde estuvo detenido el señor ALEXANDER ARANA FLOR y de las condiciones de la misma, deberá pronunciarse de fondo el MUNICIPIO DE PALMIRA, toda vez que no es competencia de la entidad que represento, como quiera que las condiciones de hacinamiento en virtud de la ley no están atribuidas a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL - DESAJ, tal perjuicio alegado deberá probarse y acreditarse.

7.- No es un hecho, es un requisito de procedibilidad.

RAZONES DE LA DEFENSA.

Sea lo primero manifestar al despacho, que en el presente caso debe operar el **RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD**, donde deben allegarse al proceso las pruebas que el demandante pretende hacer valer y los perjuicios ocasionados, lo cual no se observa en el presente asunto.

Ahora, sobre los LEGITIMADOS EN LA CAUSA POR PASIVA, tenemos a:

- NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.



- NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICIA.
- NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.
- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC).
- UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC).
- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
- MUNICIPIO DE PALMIRA

El demandante pretende se declare a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC” y a la Unidad Penitenciaria y Carcelaria de Colombia “USPEC” y otros, son administrativamente responsables por los daños y perjuicios que reclaman, alegando como título jurídico de imputación de responsabilidad patrimonial la “supuesta” falla del servicio.

En razón a tal premisa, es imperioso citar las normas relativas a la responsabilidad del Estado y en particular las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que consagran los títulos de imputación de responsabilidad, analizarlas frente a las consideraciones que respecto a ello ha hecho el H. Consejo de Estado y examinar si la entidad debe responder por los hechos alegados.

La falla en el servicio para que pueda considerarse verdadera causa de perjuicio y comprometa la responsabilidad del Estado "no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración puede considerarse como "anormalmente deficiente". (Consejo de Estado, Sentencia de agosto 4 de 1994. Expediente 8487).

El artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas”. Se trata de una cláusula general de responsabilidad del Estado, cuya estructuración se determina a partir del cumplimiento de dos (2) requisitos:

1. Existencia de un daño antijurídico
2. Que éste sea imputable a la acción u omisión de una autoridad pública.

La noción de daño antijurídico, fue definida por el Consejo de Estado, como aquella lesión patrimonial o extrapatrimonial causada en forma lícita o ilícita, que el perjudicado no está en el deber jurídico de soportar. El daño puede tener por fuente en una actividad irregular o ilícita, y en el ejercicio normal de la función pública que causa lesión a un bien o derecho del particular, el cual no está obligado a soportar.

Por su parte, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270/96-Capítulo VI del Título III), reguló lo relacionado con la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, por las acciones u omisiones que causen daños antijurídicos, a cuyo efecto determinó tres presupuestos:

- Error jurisdiccional (art. 67)
- Privación injusta de la libertad (art. 68).
- Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69)

Debe resaltarse que el título de imputación aquí alegado por el demandante es **“la falla en el servicio carcelario”** pero no se alega ningún título de imputación de los que corresponden, según la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, a la Rama Judicial, por manera que desde bien temprano se advierte la falta de legitimidad en causa por pasiva de la entidad que represento.

Ahora bien, en cuanto a la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, y especialmente respecto a la administración del sistema nacional penitenciario, es una función que le corresponde al Gobierno Nacional por intermedio del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, adscrito al Ministerio de Justicia, y a la Unidad Administrativa Especial Penitenciaria y Carcelaria¹.

¹ Decreto 4150 de 2011, Artículo 4°. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo



La Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario establece en sus normas:

Artículo 14. CONTENIDO DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO *Corresponde al Gobierno Nacional por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado.*

Artículo 15. SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO *El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.*

Artículo 22. PENITENCIARIAS. *Las penitenciarías son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema progresivo para el tratamiento de los internos, en los términos señalados en el artículo 144 del presente Código.*

Estos centros de reclusión serán de alta o máxima, media y mínima seguridad. Las especificaciones de construcción y el régimen interno establecerán la diferencia de estas categorías.

Las autoridades judiciales competentes podrán solicitar al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que los detenidos o condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de reclusión, en atención a sus condiciones de seguridad.

Artículo 35. EJECUCION DE LA DETENCION Y DE LA PENA. *Son funcionarios competentes para hacer efectiva las providencias judiciales sobre privación de la libertad en los centros de reclusión, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los Directores Regionales y los directores de los establecimientos enunciados en el Título II.*

Artículo 36. JEFES DE GOBIERNO PENITENCIARIO Y CARCELARIO *El director de cada centro de reclusión es el jefe de gobierno interno. Responderá ante el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del funcionamiento y control del establecimiento a su cargo.*

Los empleados, los detenidos y condenados deben respeto y obediencia al director, y estarán sometidos a las normas de este Código y a las reglamentaciones que se dicten.

Artículo 61. EXAMEN DE INGRESO Y EGRESO. *Al momento de ingresar un procesado o condenado al centro de reclusión se le abrirá el correspondiente registro en el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipe) y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico, patologías y demás afecciones para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si durante la realización del examen se advierte la necesidad de atención médica se dará la misma de inmediato. Cuando se advierta trastornos psíquicos y mentales se remitirá para valoración psiquiátrica y se comunicará al juez que corresponda con el fin de que se dé la orden de traslado a uno de los establecimientos de que trata el artículo 24 de la Ley 65 de 1993, si la enfermedad es incompatible con la privación de la libertad en un establecimiento penitenciario o carcelario.*

Artículo 62. FIJACION DE PENITENCIARIA Y EVALUACION DE INGRESO. *Cuando sobre el sindicado recaiga sentencia condenatoria, el Juez, con la correspondiente copia de dicha sentencia lo pondrá a disposición del Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.*

Al ingresar un condenado a una penitenciaría, éste será sometido al examen de que habla el artículo anterior y además, se iniciará su evaluación social y moral, de acuerdo con las



pautas señaladas para la aplicación del régimen progresivo, debiéndose abrir la respectiva cartilla biográfica.

Artículo 63. CLASIFICACION DE INTERNOS Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen normal.

Artículo 67. PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y ELEMENTOS. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas de la libertad.

Cuando resulte necesario y únicamente por razones de salud, el médico podrá establecer la modificación del régimen alimentario de las personas privadas de la libertad o podrá autorizar que estas se provean su propia alimentación desde el exterior del establecimiento penitenciaria siempre y cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los demás casos solo podrá ser autorizado por el Consejo de Disciplina. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las convicciones religiosas de la persona privada de la libertad.

Artículo 68. POLITICAS Y PLANES DE PROVISION ALIMENTARIA. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que podrá ser por administración directa o por contratos con particulares. Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de las personas privadas de la libertad. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas decentemente dispuestas.

Artículo 69. EXPENDIO DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD. La dirección de cada centro de reclusión organizará por cuenta de la administración, el expendio de artículos de primera necesidad y uso personal para los detenidos y condenados.

Está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

En ningún caso se podrá establecer expendios como negocio propio de los internos o de los empleados.

El INPEC fijará los criterios para la financiación de las cajas especiales.

Artículo 73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella.

Artículo 75. CAUSALES DE TRASLADO. Son causales del traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento Penal, las siguientes:

1. Cuando así lo requiera el estado de salud del interno, debidamente comprobado por el médico legista.
2. Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento.
3. Cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno.
4. Cuando sea necesario para descongestionar el establecimiento.
5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos.

Artículo 104. ACCESO A LA SALUD. Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicas o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica.



Artículo 105. SERVICIO MEDICO PENITENCIARIO Y CARCELARIO. *El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud.*

Artículo 106. ASISTENCIA MÉDICA DE INTERNOS CON ESPECIALES AFECCIONES DE SALUD. *Las personas privadas de la libertad portadoras de VIH, con enfermedades infectocontagiosas o con enfermedades en fase terminal serán especialmente protegidas por la dirección del establecimiento penitenciario en el que se encuentren, con el objetivo de evitar su discriminación. El Inpec podrá establecer pabellones especiales con la única finalidad de proteger la salud de esta población.*

El Inpec, con el apoyo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y las empresas responsables en materia de salud, cumplirán con los protocolos médicos establecidos para garantizar el aislamiento necesario a los reclusos con especiales afecciones de salud que así lo requieran.

Los artículos 142 y 143 de la Ley 65 de 1993 establecen el objeto y el modo como ha de surtir el tratamiento penitenciario. Dicha normatividad establece que debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto, de forma progresiva, programada e individualizada y a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia.

Se destaca además, que nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ha enunciado que el INPEC cuenta con la discrecionalidad que le otorgan las distintas normas existentes sobre la administración cancelaria para acceder o negar los beneficios administrativos dentro del tratamiento penitenciario, facultad que sin embargo no es absoluta, toda vez que si bien las autoridades administrativas tienen un margen de potestad para ejecutar el tratamiento penitenciario dependiendo de las circunstancias particulares de cada penal y de cada recluso, la misma está sujeta a los fines y objetivos para los que fue instituido el régimen penitenciario y a los requisitos que la ley consagra para el otorgamiento de los distintos beneficios en cada una de sus fases. Lo anterior, no es otra cosa que el respeto por la vigencia del principio de legalidad en todas las actuaciones administrativas internas de los penales².

En ese sentido, de acuerdo con la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2004, los establecimientos de reclusión del orden Nacional son de responsabilidad del INPEC, categoría a la que pertenece el Establecimiento Penitenciario y Carcelario - USPEC. Además, de acuerdo con el Decreto 4151 de 2011, los “Establecimientos de Reclusión” hacen parte de la estructura del INPEC y tienen atribuidas funciones tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

Así las cosas, en caso de acceder a las pretensiones de la demanda, se debe ordenar a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que debe responder por los daños y perjuicios que se hubieren podido causar al demandante, pues la custodia de los presos está en titularidad del INPEC, para lo cual debe tener en cuenta las reglas de equilibrio decreciente señaladas en la sentencia T- 388 de 2013³.

Resáltese que el señor ALEXANDER ARANA FLOR estuvo privado de la libertad por haber sido un infractor de la ley penal del Estado, es decir que su errado y dañino actuar en sociedad, conllevó a que tuviera que retribuir a la misma mediante el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, es decir que ello se debió a un hecho propio, a su propia culpa, por ello debió soportar las vicisitudes que presenta el sistema carcelario y la vida en prisión.

Finalmente se resalta que, no hay prueba que lo demuestre, que la Nación-Rama Judicial incurrió en alguno de los títulos jurídicos de imputación señalados en la Ley 270 de 1996 a saber: error jurisdiccional (art. 67), privación injusta de la libertad (art. 68) o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69), echo que descarta el éxito de las pretensiones contra esta entidad.

² Sentencia T-1670 de 5 de diciembre de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz
³ M.P. María Victoria Calle Correa.



MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO QUE REGULA LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC).

A efectos de recopilar el marco normativo que regula las funciones asignadas legalmente al INPEC y a la USPEC, es importante destacar que los establecimientos de reclusión forman parte de la estructura del **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC**, según lo previsto en el numeral 7.1 del artículo 7º del Decreto 4151 de 3 de noviembre de 2011⁴; no obstante, visto el artículo 1º del Decreto 4150 de 3 de noviembre de 2011⁵, se advierte que de dicha entidad se escindieron las funciones administrativas y de ejecución de actividades para el cumplimiento de sus objetivos, las cuales fueron asignadas a la **Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC** y a las dependencias a su cargo; así, el artículo 2º *ibídem* creó este organismo como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

A pesar de la escisión de las mencionadas funciones, lo cierto es que el **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC** tiene a su cargo determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la **Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC**, en los términos del numeral 5 del artículo 5 del Decreto 4150.

A su turno, el artículo 4º del Decreto 4150 señala que el objeto de la **Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC** se contrae a “[...] *gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC* [...]”.

En desarrollo del objeto antes mencionado, el artículo 5º de la norma en referencia enlista las funciones a cargo de la **Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC**, de las cuales, para el caso concreto, resultan relevantes las siguientes:

“[...] Artículo 5º. Funciones. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, cumplirá las siguientes funciones:

- 1. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en la definición de políticas en materia de infraestructura carcelaria.*
- 2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.*
- 3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria.*
- 4. Administrar fondos u otros sistemas de manejo de cuentas que se asignen a la Unidad para el cumplimiento de su objeto.*
- 5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria.*
- 6. Elaborar las investigaciones y estudios relacionados con la gestión penitenciaria y carcelaria, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho y hacer las recomendaciones correspondientes.*
- 7. Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria.*
- 8. Realizar, directamente o contratar con terceros, las funciones de supervisión, interventorías, auditorías y en general, el seguimiento a la ejecución de los contratos de concesión y de las alianzas público-privadas, o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba.*

⁴ “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y se dictan otras disposiciones”.

⁵ “Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”.



9. *Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades competentes.*
10. *Asesorar, en lo de su competencia, en materia de gestión penitenciaria y carcelaria.*
11. *Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional. [...]”.*

De acuerdo al recuento normativo en referencia, resulta palmario que el **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC** y la **Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC**, actúan en forma coordinada para la satisfacción de, entre otras, las necesidades de infraestructura de los establecimientos de reclusión y la definición de los lineamientos en ese mismo ámbito; no obstante, corresponde a la **Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC** la obligación de realizar las gestiones que se requieran para que se ejecuten los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos –incluyendo infraestructura-, para que se cumpla la actividad penitenciaria a plenitud.

De conformidad con los Decretos 4150 del 3 de noviembre de 2011,⁶ y 4151 del 3 de noviembre de 2011,⁷ le corresponde al INPEC y a la USPEC participar de manera activa dentro del procedimiento administrativo para la realización de obras y mantenimiento de los establecimientos carcelarios; pues el primero está obligado a priorizar las necesidades de los establecimientos, en tanto la segunda, se encuentra obligada a la distribución del presupuesto atendiendo las necesidades indicadas por el INPEC.

Así las cosas, es el INPEC y la USPEC, las que vienen desconociendo las competencias y obligaciones emanadas de los Decretos 4150 del 3 de noviembre de 2011,⁸ y 4151 del 3 de noviembre de 2011,⁹ al tenor de lo normado en las Leyes 1709 del 20 de enero de 2014¹⁰ y 715 del 21 de diciembre de 2001¹¹.

En ese orden de ideas, en caso de demostrarse algún perjuicio o daño, se debe condenar a la USPEC, al INPEC, al MUNICIPIO DE PALMIRA y al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a la población privada de la libertad en el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO, debido a los problemas que soporta.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS LEGALES DADAS A LOS DEPARTAMENTOS Y A LOS MUNICIPIOS, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO.

Las funciones y competencias legales que le han sido atribuidas a los **Departamentos** y a los **Municipios**, en lo que al sistema penitenciario y carcelario se refiere, se regulan según lo dispuesto en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia de 1991 señaló que son fines esenciales del Estado, entre otros, “(...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Igualmente, se estableció que “(...) [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Frente a la responsabilidad de los **Departamentos**, la Sala encuentra que en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 65 del 19 de agosto de 1993,¹² modificado por el artículo 8° de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014,¹³ los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el INPEC, entidad que en coordinación con la USPEC, determinará los lugares donde han de funcionar y se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para asignar los recursos suficientes a la USPEC con

⁶ “Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”.

⁷ “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y se dictan otras disposiciones”.

⁸ “Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”.

⁹ “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y se dictan otras disposiciones”.

¹⁰ “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.

¹¹ “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”

¹² “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

¹³ “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.



el fin de “(...) crear, organizar y mantener los establecimientos de reclusión, con miras a que estos cuenten con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas, para un tratamiento penitenciario digno”.

Por su parte, los artículos 17 y 21 de la Ley 65 de 1993, modificados por la Ley 1709 de 2014, señalan que “[...] **Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.**”.¹⁴ (Subrayado y Negrita propio).

Al respecto, la H. Corte Constitucional, mediante sentencia de constitucionalidad C – 471 del 19 de octubre de 1995, indicó que:¹⁵

“(...) dada la naturaleza misma de la función carcelaria y penitenciaria, relacionada con la condición misma de las personas detenidas preventivamente o condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva, el Legislador consideró conveniente trasladar las competencias señaladas en el artículo 17 respecto de las cárceles, para lo cual está facultado de conformidad con los artículos 150 numerales 2, 4, 8 y 23; artículo 154; artículo 189 numeral 17; artículo 200 numeral 1o.; artículo 201 numeral 1o.; artículos 209 y 210; artículo 286, artículo 298; y artículo 311 de la Constitución Política, entre otros (...).”

De otra parte, y en lo que respecta a los **Municipios**, al igual que a los departamentos, sus obligaciones se circunscriben a los centros carcelarios de su jurisdicción en atención a las personas detenidas preventivamente.¹⁶

No obstante lo anterior, a la administración Municipal le corresponde, entre otros asuntos, garantizar que los servicios públicos se presten a sus habitantes de manera eficiente (...) ¹⁷ y, de conformidad con la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, ¹⁸ son competencias de los distritos y los municipios, ¹⁹ entre otras: **i)** En coordinación con el INPEC, podrán apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad; y **ii)** Podrán establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar.²⁰

Descendiendo al caso concreto, si bien es cierto que recae en el INPEC y en la USPEC el deber y la obligación de atender los asuntos al interior de los Centros Penitenciarios y Carcelarios del país, como lo son entre otros, la atención médica; las condiciones de salubridad; la asignación de celdas para dormir y para atender visitas conyugales; los traslados de internos a otros establecimientos; la prestación del servicio de salud; agua; alimentación; y de infraestructura carcelaria,²¹ ello no significa que no sea necesaria una colaboración armónica, conjunta, contigua y concatenada entre el departamento y el municipio, y todo ello, bajo la justificación de velar y proteger los derechos e intereses colectivos que efectivamente fueron conculcados y/o transgredidos en el *sub judice*.

En ese sentido, de acuerdo con la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2004, los establecimientos de reclusión del orden nacional son de responsabilidad del INPEC²², instituto cuyas funciones administrativas y de ejecución de actividades si bien fueron escindidas por virtud de lo dispuesto en el Decreto 4150 de 2011²³ y le fueron atribuidas a la USPEC, los

¹⁴ *Ibíd.*, artículo 76.6.

¹⁵ H. Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-471 del 19 de octubre de 1995, exp. No. D-814, M.P. Hernando Herrera Vergara.

¹⁶ *Ibíd.*, artículo 76.6.

¹⁷ *Ibíd.*, numeral 5.1.

¹⁸ “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

¹⁹ Artículo 7°.

²⁰ *Ibíd.*, artículo 76.11.

²¹ Según lo establecido en los Decretos 4150 del 3 de noviembre de 2011 y 4151 del 3 de noviembre de 2011.

²² “**Ley 65/93. Artículo 16. Establecimientos de reclusión nacionales. Modificado por el art. 8 de la Ley 1709/14.** Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el Inpec (...)”.

²³ “**Decreto 4151/11. Artículo 1. Objeto.** El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.”



servicios penitenciarios y carcelarios continuaron estando a su cargo²⁴. Además, de acuerdo con el Decreto 4151 de 2011, los “*Establecimientos de Reclusión*” hacen parte de la estructura del INPEC²⁵ y tienen atribuidas funciones²⁶ tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

EXCEPCIONES

1). FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA NACION - RAMA JUDICIAL – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por cuanto la entidad a la cual represento no realizó ninguna actuación judicial contraria a ley, ni expidió Auto o Providencia contraria a la normatividad legal vigente, es decir, no ejerció ninguna actuación dentro de la ocurrencia de los hechos. Tal como se prueba en la narración de los hechos y de la documentación anexa a la demanda, es fácil establecer que la responsabilidad única dentro de la presente acción es el **MINISTERIO DE JUSTICIA, INPEC, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PENITENCIARIA Y CARCELARIA DE COLOMBIA “USPEC”, ESTACION DEL CAI – COMANDO SUR DE PALMIRA Y AL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA**, entidades que tienen la obligación, según su función misional, las de administrar el sistema nacional carcelario y disponer el traslado de los internos a los establecimientos que lo requieran de acuerdo a sus condiciones sociales, culturales y salubres y NO de la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

En los procesos civiles, laborales y contenciosos administrativos, esa condición o cualidad que constituye la legitimación en la causa se refiere a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en el litigio o que es el objeto de la decisión reclamada.

En los procesos contenciosos, la legitimación en la causa consiste respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelve si existe o no el derecho o relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del **demandado** en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante.

Por lo anterior, solicito muy respetuosamente se declare de manera oficiosa la **FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA**, dado que NO HUBO actuaciones de la Nación - Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial.

En conclusión, el presunto resultado dañoso resulta imputable a la conducta desplegada por dichas entidades, más NO a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL, de allí que se diga desde ya que se presenta carencia absoluta de responsabilidad de parte de ésta.

2). INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD: Toda vez que como ya se demostró, hay claramente una exclusión de la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad de reparar el daño a la entidad que represento.

3.) AUSENCIA DE IMPUTABILIDAD EN RELACIÓN CON MI REPRESENTADA: obra prueba en el presente proceso de que la imputabilidad del DAÑO como la atribución jurídica, debe hacerse a la entidad pública que realmente generó el daño previa acreditación de la antijuridicidad y que finalmente es la llamada a responder bajo el título de imputación que este juzgador considere, teniendo en cuenta lo acontecido en el proceso penal y las pruebas arrojadas a este.

²⁴ “**Decreto 4150/11. Artículo 4. Objeto.** La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC” (subrayado fuera del texto).

²⁵ “**Decreto 4151/11. Artículo 7. Estructura.** La estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, será la siguiente: (...)”

“7. Direcciones Regionales

“7.1. Establecimientos de Reclusión

“(...)”.

²⁶ “**Decreto 4151/11. Artículo 30. Establecimientos de Reclusión.** Son funciones de los Establecimientos de Reclusión, las siguientes:

“1. Ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial.

“2. Ejecutar los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos de la población privada de la libertad.

“(...)”.



4.) INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO: Se reitera, no existió error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia atribuible a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL dentro de las actuaciones surtidas por los despachos que conocieron del proceso penal, toda vez que sus actuaciones estuvieron dentro del marco de la normatividad vigente. En consecuencia, no puede atribuírsele responsabilidad alguna a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL por el agotamiento del trámite propio del proceso judicial, haciéndose evidente que no existe nexo causal con el daño antijurídico alegado.

5). INEXISTENCIA DE PRUEBA DE FALLA DE SERVICIO: no existe prueba que demuestre que la Rama Judicial fue la causante determinante en la producción del resultado o daño.

6). INEXISTENCIA DE PERJUICIOS OCASIONADOS: No se prueban los perjuicios causados al demandante, pues en el escrito no se demuestran los “*supuestos*” perjuicios ocasionados, ello a través de pruebas reales y documentales, siendo ajustadas a derecho todas y cada una de las actuaciones de la Administración, no existió en ningún momento daño alguno que pueda imputársele a la Entidad que represento, y por ende no hay lugar a resarcimiento de perjuicios, por lo que dichas pretensiones deben desecharse.

7)EXCEPCIÓN AL RÉGIMEN DE IMPUTACIÓN OBJETIVA: pues en el presente caso debe operar el régimen subjetivo de responsabilidad, el cual traslada a la parte demandante la carga de la prueba de la falla del servicio; entonces se trata claramente de una RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, es decir, deben allegarse al proceso las pruebas que la parte demandante pretende hacer valer.

8). ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA A SU FAVOR: pretende el demandante obtener provecho del erario público, del presupuesto nacional a través de la presente demanda contra la Nación, por actuaciones en las que no intervino la Nación – Rama Judicial.

9). INNOMINADA O GENÉRICA: Solicito comedidamente, se declare de oficio cualquier excepción que el fallador encuentre probada en este proceso, ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 187 inciso 2º del CPACA.

PETICIONES

- Que se declaren probadas las excepciones propuestas en el presente escrito y como consecuencia se exonere de responsabilidad a la entidad que represento, especialmente la excepción de FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por la Nación – Rama Judicial.
- Que se nieguen las pretensiones de la demanda, por las razones de hecho y de derecho expuestas en este escrito, máxime cuando se ha demostrado que no hubo falla en el servicio por parte de la entidad que represento.

PRUEBAS.

- Las que el juez considere pertinentes y útiles al proceso.

ANEXOS.

1. Poder otorgado a la suscrita por la señora Directora Seccional de Administración Judicial de Cali, Doctora LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO.
2. Resolución N° 6141 del 17 de Junio de 2024 “Por medio de la cual se hace un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción”, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3. Acta de Posesión de la Directora Seccional de Administración Judicial de Cali, suscrita el 04 de Julio de 2024.
4. Fotocopia Cédula de Ciudadanía N° 66.812.824, correspondiente a la Directora Seccional de Administración Judicial, Doctora LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

NOTIFICACIONES

- En la Carrera 10 No 12-15 Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali. Teléfono
- Correo de notificaciones: dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Atentamente,

DIANA CAROLINA ARGOTE DELGADO
C.C No. 29.177.864 de Cali (Valle)
T.P No. 378.953 del C. S. de la Judicatura